

REPENSANDO EL EXTRACTIVISMO: LA DEPENDENCIA, EL NACIONALISMO DE RECURSOS Y LA RESISTENCIA EN AMÉRICA LATINA

Steve Ellner¹

sellner74@gmail.com

Universidad de Oriente, Venezuela

Este artículo se centra en las dualidades de las políticas hacia el sector extractivista de gobiernos latinoamericanos del siglo veintiuno. Por el lado negativo, los megaproyectos extractivistas acometidos por el capital multinacional tuvieron un impacto ambiental devastador además del despojo de las tierras indígenas. Por el lado positivo, el nacionalismo de los recursos promovido por los gobiernos de la “Marea Rosada” ha generado un ingreso sustancial que fue asignado a programas sociales. El artículo resume la tesis de los escritores del “neo-extractivismo” (el extractivismo del siglo 21) y concluye que exageran la homogeneidad de los países de la “Marea Rosada” y los conservadores y pasan por alto el asunto que más diferencia los gobiernos en cuanto al extractivismo: las condiciones aplicadas a las inversiones extranjeras, como los impuestos y los derechos laborales, así como también el mayor grado de control estatal sobre la economía.

Palabras claves: *neo-extractivismo, la “Marea Rosada”, daño ambiental, derecho de consulta*

¹ Editor Asociado de la revista académica “Latin American Perspectives”. Profesor jubilado de la cátedra de historia económica de la Universidad de Oriente en Venezuela.

RETHINKING EXTRACTIVISM: DEPENDENCY, RESOURCE NATIONALISM AND RESISTANCE IN LATIN AMERICAN

This article focuses on the dualities of Latin American governments' policies towards the extractivist sector in the twenty-first century. On the negative side, the extractivist megaprojects undertaken by multinational capital had a devastating environmental impact in addition to the dispossession of indigenous lands. On the positive side, the resource nationalism promoted by the "Pink Tide" governments has generated substantial income that was allocated to social programs. The article summarizes the thesis of the writers of "neo-extractivism" (21st century extractivism) and concludes that they exaggerate the homogeneity of the "Pink Tide" and conservative countries and overlook the issue that most differentiates the governments in terms of extractivism: the conditions applied to foreign investments, such as taxes and labor rights, as well as the greater degree of state control over the economy.

Keywords: *neo-extractivism, the "Pink Tide", environmental damage, right of consultation*

Introducción

Dos características de América Latina en el siglo veintiuno son contradictorias. (1) Por un lado, la penetración del capital extranjero en las economías locales se ha intensificado. Como resultado, la burguesía local en la región ha perdido la independencia limitada que anteriormente tenía frente al capital extranjero. Además, las empresas multinacionales se han apoderado de numerosas industrias como consecuencia de la privatización masiva del periodo neoliberal de los 90, con una participación mínima del capital local en el caso de países como Venezuela, Perú y Bolivia. Finalmente, el mayor peso del sector extractivista en las economías latinoamericanas en comparación con la etapa de la sustitución de importaciones ha intensificado la dependencia del capital extranjero y limitado las oportunidades para el capital local. Esto ha ocurrido porque las industrias extractivistas que atraen el capital extranjero tienden a ser tecnológicamente avanzadas e intensivas en capital, aún más como resultado de las recientes innovaciones en áreas como la fracturación hidráulica, la minería de superficie y la agricultura genéticamente modificada.

Por otro lado, a partir de 1998 con la elección de Hugo Chávez en Venezuela, los gobiernos progresistas de América Latina, conocidos como la “Marea Rosada,” implementaron políticas que endurecieron los términos impuestos sobre las inversiones extranjeras. El discurso de Chávez fue típico del nacionalismo de recursos basado en la idea que databa de Simón Bolívar que la riqueza del suelo y el subsuelo pertenece a la nación y debe beneficiar mayormente a su pueblo. Con la llegada de la Marea Rosada, América Latina alcanzó un grado de unidad sin precedente desde la independencia, un logro que se tradujo en pasos hacia la integración continental diseñada para reducir la dependencia del capital global. Además, el concepto del “mundo multipolar” popularizado por Chávez llegó a ser el principio fundamental de la política extranjera de los gobiernos de la Marea Rosada y en algunos casos fue aceptado por los de tendencia conservadora. El término “multipolar”, en efecto, fue un eufemismo para indicar la oposición al dominio norteamericano, por no decir el anti-imperialismo (Cannon, 2009: 178, 190).

Este artículo se centra en las dualidades en cuanto a los aspectos positivos y negativos de las políticas hacia el sector extractivista de gobiernos latinoamericanos del siglo veintiuno. Por el lado negativo, los megaproyectos extractivistas acometidos por el capital multinacional tuvieron un impacto ambiental devastador en todas partes de la región. Otro aspecto es el despojo de las tierras indígenas y violaciones de los derechos indígenas que en algunos casos están encarnados en la constitución (el caso más reciente es el de Brasil bajo Jair Bolsonaro). Por el lado positivo, el nacionalismo de los recursos promovido por los gobiernos de la Marea Rosada ha generado un ingreso sustancial que fue asignado a programas sociales que aliviaron la pobreza y en algunos casos proporcionaron a las clases populares un sentido de empoderamiento.

Este punto de vista balanceado de las industrias extractivistas contrasta con el pesimismo de muchos autores incluyendo aquellos situados a la izquierda del espectro político que enfocan su análisis en los efectos nocivos del llamado “neo-extractivismo”, o el extractivismo del siglo veintiuno. Su tesis es que la expansión del sector extractivista en América Latina durante las últimas décadas ha tenido un impacto altamente negativo sobre la democracia, el desarrollo económico, el ambiente, y la población indígena, lo cual desde su punto de vista pesa más que los aspectos positivos de las políticas de los gobiernos de la Marea Rosada. Estos escritores a menudo minimizan o niegan la importancia de las diferencias entre los gobiernos progresistas y los conservadores en base de que todos ellos se han sometido a las exigencias y la lógica del capital global. Mientras que los programas sociales de la Marea Rosada son considerados generalmente un logro sobresaliente, algunos de estos escritores plantean que servían para justificar y distraer la atención de los efectos devastadores del neo-extractivismo. Similarmente, mientras que algunos analistas consideran el surgimiento de China como una potencia económica beneficiosa para América Latina ya que facilita la diversificación comercial en el marco de las “relaciones Sur-Sur”, los escritores del neo-extractivismo lo ven como una duplicación de las relaciones metrópolis-satélite que fortalece la dependencia.

El argumento central de los escritores del neo-extractivismo, el cual plantea que los gobiernos latinoamericanos del siglo veintiuno, de todas las tendencias ideológicas, no lograron la diversificación industrial y agrícola y reducir la dependencia, es válido. Parte de la explicación es que los gobiernos de la Marea Rosada priorizaron las metas sociales por encima de las económicas. Por cierto, algunos de los líderes de la Marea Rosada reconocen esta falla (García Linera, 2016; Anderson, 2017). Sin embargo, muchos de los escritores del neo-extractivismo exageran en dos aspectos. En primer lugar, tienden a ver todos los problemas y desafíos que los gobiernos del siglo veintiuno enfrentan por el mismo lente del extractivismo y el capitalismo global, y subestiman el papel de las reformas que no enfrentan directamente el capital global. En segundo lugar, muchos de ellos pasan por alto o subestiman las disimilitudes entre los gobiernos de orientaciones políticas distintas. Inclusive, algunos de estos escritores explícitamente niegan que los gobiernos de la Marea Rosada rompieran con el neoliberalismo o que pudieran ser calificados como de la izquierda. Así, por ejemplo, ven las protestas en Ecuador contra el presidente neoliberal Lenín Moreno como una continuación de las protestas contra el presidente de tendencia progresista Rafael Correa (Zibechi, 2019; Acosta, 2020). Otros escritores reconocen las diferencias que existen (Gudynas, 2012: 11), pero tienden a minimizar su importancia al alegar que aspectos básicos de las políticas de la Marea Rosada se asemejaban al neoliberalismo. Estos escritores apuntan a “la evolución de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominación más tradicionales” conjuntamente con su aceptación de la división internacional de trabajo (Svampa and Viale, 2014: 361, 264; Svampa, 2012: 55).

En realidad, los diferentes gobiernos latinoamericanos manifestaron un comportamiento muy diferente en cuanto a varios asuntos importantes que discuten los escritores del neo-extractivismo. Esto es particularmente el caso con la legislación y políticas hacia el capital extranjero. Diferencias importantes existían también en otras áreas, incluyendo las políticas ambientales. Desestimar estas diferencias es equivalente a los defensores del “Green New Deal” en los Estados Unidos ignorando o minimizando la importancia de las diferencias entre las posiciones de los “centristas” del Partido Demócrata, los del ala tradicional del Partido Republicano y los que niegan el cambio climático como Donald Trump.

La tesis del neo-extractivismo y sus fallas

Es necesario colocar el surgimiento de la tesis del neo-extractivismo en su contexto histórico. El colapso de la bolsa de valores en 2008 abrió el camino para la Gran Recesión, que minó la estabilidad laboral para los trabajadores y sectores de la clase media e intensificó la precariedad laboral. En el contexto de estos acontecimientos, una perspectiva economicista hubiera pronosticado avances para la izquierda, pero al contrario una ola derechista arrasó el mundo entero. Como resultado del enfriamiento de la economía china entre otros factores, el boom de las materias primas en la primera década del siglo veintiuno cedió el paso a la baja de los precios para esos productos, una tendencia que menoscabó la economía de América Latina.

Con una economía más débil, la mayoría de los gobiernos y partidos de la Marea Rosada llegaron a acuerdos con intereses empresariales y les hicieron concesiones y en el proceso fortalecieron las manos del capital extractivista (Webber, 2015a: 165). En Brasil, al ser reelegida presidenta en 2014, Dilma Rousseff nombró a un ejecutivo de alto rango de uno de los bancos principales del país como ministro de finanza; en Bolivia, Evo Morales después de su reelección en 2009, llegó a un acuerdo con la principal organización empresarial de Santa Cruz, el departamento más grande y próspero del país, a costa de los intereses de los sectores populares; y en Ecuador (en 2017), Argentina (2019) y Uruguay (2019), los partidos de la Marea Rosada seleccionaron a moderados como candidatos presidenciales. Estos acontecimientos convencieron a algunos de los escritores del neoextractivismo que los gobiernos de la Marea Rosada habían prácticamente abandonado sus compromisos de luchar para superar la dependencia y lograr transformaciones estructurales.

Para los escritores del neoextractivismo, los planes para construir una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécuré (TIPNIS) en Bolivia en 2012 e iniciar la perforación petrolera en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador en 2013, iniciativas que condujeron a protestas indígenas y represión, marcaron un cambio de rumbo. En ambos casos, las decisiones para iniciar esos proyectos fueron diseñadas para contrarrestar la baja de los precios internacionales de las materias primas, pero al mismo tiempo amenazaron con violar derechos constitucionales y producir daño ecológico a gran escala. Para estos escritores, el neoextractivismo no se

diferenció de manera significativa con el extractivismo del siglo veinte, pero sí tenía “nuevas dimensiones” (Svampa, 2019: 12; Gudynas, 2016: 722–724; Lander, 2014: 5–6). Sus características sobresalientes incluyeron los estrechos lazos económicos con China, la escala de mayor envergadura de los proyectos extractivistas, la existencia de una crisis ecológica, un mayor papel desempeñado por el Estado y (en el caso de los países de la Marea Rosada) programas sociales ambiciosos financiados por el ingreso derivado del extractivismo.

En su énfasis sobre los denominadores comunes de los países latinoamericanos en respuesta a las imperativas globales, los escritores del neo-extractivismo aseveran que existe un consenso entre los gobiernos latinoamericanos sobre los beneficios del extractivismo como generador de ingresos y divisas y la falta de alternativas factibles. Maristella Svampa llama esta creencia “consenso de los commodities” que apunta a la aceptación por algunos líderes políticos latinoamericanos de la noción que el extractivismo era inevitable, que era como una cuestión de “destino” (Svampa, 2019: 13) y que era “irrevocable o irresistible” (Svampa, 2015: 67). En este sentido asemejaba el pensamiento referente a la globalización y el neoliberalismo encarnado en el “Consenso de Washington” planteado como: “no hay alternativas” (Svampa, 2019: 13–14). En su apoyo a este paradigma, los gobiernos latinoamericanos, inclusive los progresistas, presuntamente manifestaron un grado de intolerancia hacia cualquier planteamiento alternativo, ya que “se esforzaron en negar o encubrir la discusión sobre las implicaciones (los impactos, las consecuencias, el daño) del modelo extractivista” (Svampa, 2019: 1). Además, de acuerdo con estos escritores, cualquier beneficio proveniente de la nacionalización de industrias extractivistas y los programas sociales y de desarrollo nacional financiado por el extractivismo fue contrapesado por el hecho que fueron invocados para desviar la atención de los efectos nocivos del extractivismo (Svampa, 2012: 53–54; Petras and Veltmeyer, 2014: 35–36; López and Vértiz, 2015: 162–165; Webber, 2017: 287–288).

Los gobiernos de la Marea Rosada, concordante con su compromiso con el estado de bienestar, justificaron los megaproyectos extractivistas basándose en que el ingreso público generado por el extractivismo fortalecía al Estado (Svampa, 2019: 15). Svampa asevera que la parcial nacionalización de la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por parte de la Presidenta Cristina Fernández reforzó su compromiso de “promover la transformación de un paradigma basado en *commodities* a uno de ‘recursos estratégicos’ basado en el control estatal de hidrocarburos”, pero en el proceso sirvió para “reprimir... el debate sobre los riesgos ambientales y sociales de fracturación hidráulica” en la Patagonia (Svampa, 2019: 23; 2014: 324). Algunos escritores de la izquierda consideran la justificación al extractivismo por parte de los gobiernos de la Marea Rosada como retórica vacía. Por ejemplo, Jeppe Krommes-Ravnsmet (2019: 77–78), asevera que Evo Morales “encubrió” sus políticas hacia el sector extractivista que fueron ambientalmente perjudiciales “con un discurso revolucionario” al mismo tiempo que su gobierno “intensifica la colaboración clasista”.

La tesis de neo-extractivismo tiene aspectos positivos y debilidades. Por el lado positivo, los escritores de neo-extractivismo documentan las formas concretas y dañinas en que la globalización en América Latina ha desmontado los avances de la etapa de sustitución de importaciones. Los escritores de neo-extractivismo, entre otros, presentan evidencia empírica abundante para demostrar que el extractivismo conduce a la violación de derechos indígenas, la destrucción ecológica, la violencia (Toledo, Garrido y Barrera-Bassols, 2015: 144–145), el consumismo (Svampa and Viale, 2014: 362), la corrupción (Gudynas, 2018: 43–70; Farthing y Fabricant, 2018: 10–11), la violación del espíritu de la democracia (Lander, 2014: 11), y la desigualdad de género y el patriarcado (Leguizamón, 2021). En el proceso, demuestran el impacto negativo que el capital global, las innovaciones tecnológicas y la demanda elevada de los commodities primarios han tenido sobre los gobiernos izquierdistas y no-izquierdistas en América Latina. Algunos de los escritores de neo-extractivismo reconocen la severidad de la represión contra los movimientos ambientales e indígenas por parte de gobiernos de la derecha en comparación con los de la Marea Rosada.

El problema se presenta cuando los escritores de neo-extractivismo comparan el “consenso de commodities” con el “Consenso de Washington”, y en el proceso dan a entender que el primer consenso representa una ideología hegemónica uniforme y bien definida como es el caso del segundo consenso (Svampa, 2019: 12–16). La interpretación de neo-extractivismo como una etapa basada en un modelo de producción con efectos trascendentales tienden a oscurecer los factores que diferencian los gobiernos de distintas orientaciones ideológicas. Este punto de vista estaría justificado si la retórica de los gobiernos de la Marea Rosada fuera vacía (como algunos escritores alegan) y si la hostilidad de los actores económicos y políticos poderosos estuviera dirigida solamente a los líderes izquierdistas en el poder (como algunos también alegan) y si ella no fuera responsable de las graves dificultades que enfrentan sus países (Ellner, 2019: 160–161). Los desafíos resultantes limitan las opciones para los dirigentes de la Marea Rosada y los presionan a adoptar estrategias populistas con el fin de reforzar el apoyo popular y así contrarrestar la campaña desestabilizadora. Por esta razón, las decisiones de iniciar proyectos extractivistas deben ser contextualizadas, aunque no necesariamente justificadas.

Svampa (2019: 1) va demasiado lejos cuando alega que, más allá de diferencias ideológicas, “todos los gobiernos latinoamericanos... tratan de negar o encubrir discusiones referentes a las implicaciones (los impactos, consecuencias y daño) del modelo extractivista, exportador”. Sin embargo, difícilmente un consenso existía sobre la estrategia o la formulación de políticas referente a los modelos de desarrollo y la necesidad de superar la dependencia. Por ejemplo, las políticas en favor del desarrollo económico bajo el gobierno de Evo Morales (encarnadas en el Plan Nacional de Desarrollo de 2006), tales como la priorización de producción para el mercado interno, fueron abandonadas por su sucesor Jeanine Áñez al beneficio de intereses agroindustriales.

En general, los escritores del neo-extractivismo tienden a exagerar la homogeneidad de la política latinoamericana del siglo veintiuno. Las importantes políticas referentes al extractivismo diferencian no solamente a los gobiernos de la Marea Rosada de los conservadores, sino también a los diferentes gobiernos dentro de ambos bloques. Por cierto, con el surgimiento de gobiernos de centro-derecha y de derecha en Argentina (2015), Colombia (2018), Chile (2018), Brasil (2019) y Bolivia (2019), estas diferencias se ven especialmente pronunciadas. Además, esos escritores generalmente minimizan o pasan por alto el asunto que más diferencia los gobiernos en cuanto al extractivismo: las condiciones aplicadas a las inversiones extranjeras, como los impuestos y los derechos laborales, así como también el mayor grado de control estatal sobre la economía (ver, por ejemplo, Svampa y Viale, 2014: 190–195).

La omisión en cuanto a las políticas hacia el gran capital, tanto doméstico como extranjero, es particularmente serio tomando en consideración el hecho de que los adversarios de los gobiernos de la Marea Rosada centraron sus críticas en la supuesta hostilidad hacia las inversiones privadas. En Argentina, por ejemplo, el agudo contraste entre los gobiernos de la Marea Rosada y el de Mauricio Macri (2015–2019) en su política hacia el sector exportador agroindustrial demuestra la falta de un consenso en cuanto al extractivismo. La legislación a favor de los agroindustriales promovida por Macri benefició a los mismos intereses que se opusieron vigorosamente a los aumentos impositivos sobre sus exportaciones implementados por los gobiernos progresistas tanto antes como después de la presidencia de Macri. Consecuentemente, el estudio del extractivismo en el siglo veintiuno tiene que colocar el enfrentamiento entre los actores políticos y económicos del estatus quo, por un lado, y los gobiernos de la Marea Rosada, por el otro lado, en el centro del análisis. Así que el contexto es esencial.

Finalmente, se puede cuestionar la validez de la presunción básica de los escritores del neo-extractivismo la cual plantea que la utilización del ingreso extractivista para promover el desarrollo económico es una estrategia inherentemente errada. La tesis del consenso de commodities plantea que los gobiernos de la Marea Rosada no priorizaron los objetivos de desarrollo económico y que además “ningún país del Sur ha logrado el desarrollo apelando a un discurso de las ventajas de la explotación de los recursos minerales” (Svampa y Viale, 2014: 194–195; Svampa, 2019: 14–15). Sin embargo, los gobiernos de la Marea Rosada priorizaron los objetivos sociales por encima de los económicos, no porque necesariamente subestimaron o ignoraron la importancia del segundo, sino por la imperativa política de lograr el apoyo popular en un ambiente político hostil (Ellner, 2020: 48–50). Alfredo Macías Vásquez y Jorge García-Arias (2021: 71) cuestionan la validez de la premisa fundamental de los escritores del neo-extractivismo: “En nuestra opinión, lo que es problemático no es tratar de superar el modelo extractivista a través de extractivismo, como los escritores post-desarrollismo alegan... sino tratar de lograr el cambio estructural en la economía sin enfrentar decisivamente la influencia del capital financiero global”.

Extractivismo y el nacionalismo de los recursos

La diferencia más importante entre los gobiernos conservadores y los de la Marea Rosada en materia de extractivismo es el nacionalismo de los recursos promovido por el segundo. El argumento en favor del nacionalismo de los recursos contrasta agudamente con la crítica a los gobiernos de la Marea Rosada por ser “estados rentistas”, países cuyos ingresos provienen de la renta (las minas, el suelo fértil, etc.) en vez de la productividad laboral. Los defensores del nacionalismo de los recursos consideran que las políticas exigentes hacia el capital extranjero son una expresión de “justicia correctiva” beneficiosa para la nación. En contraste, el enfoque rentista empleado por los escritores del “neo-extractivismo” se centra en el lado negativo, específicamente la dependencia al capital global generado por el extractivismo.

Las políticas del nacionalismo de los recursos promovidas por los gobiernos de la Marea Rosada contrastan con los de los gobiernos conservadores. La destacada importancia de estas políticas y diferencias no debe ser opacada por la tesis de la existencia de un supuesto consenso entre los gobiernos de derecha e izquierda sobre las ventajas del extractivismo. En la América Latina del siglo veintiuno, los jefes de estado pueden haber estado de acuerdo acerca de los beneficios de las industrias extractivistas, pero definitivamente no existía un consenso entre ellos referente a la manera de maximizar los ingresos derivados de extractivismo y cómo ponerlos a buen uso.

Esta sección asevera que el planteamiento del nacionalismo de los recursos fue más allá de consignas vacías (como lo que algunos analistas alegan) ya que estaba en el centro de las confrontaciones entre los gobiernos de la Marea Rosada, por un lado, y sus adversarios políticos y empresas transnacionales, por otro lado. Intensos conflictos conduciendo a veces a esfuerzos por lograr el “cambio del régimen” ocurrieron no solamente como resultado de las expropiaciones de industrias extractivistas y la creación de compañías estatales (en Venezuela, Bolivia y Argentina), sino también por la intervención del Estado en la economía. Esto ocurrió tanto en países de gobiernos radicales de la Marea Rosada como en los más moderados como Brasil.

Además, muchos analistas incluyendo los escritores del neo-extractivismo atribuyen los enormes ingresos generados al comienzo del siglo veintiuno, al boom internacional de los commodities (por el aumento de los precios y de la producción) sin tomar en cuenta que el nacionalismo de los recursos también contribuyó en gran parte al incremento del ingreso estatal (Svampa and Viale, 2014: 194-195). La legislación de hidrocarburos en los países de la Marea Rosada, por ejemplo, desempeñó un papel primordial en llenar los cofres del Estado. El adicional de 32 por ciento en la regalía e impuestos pagados por las empresas multinacionales de hidrocarburos en Bolivia como resultado de la legislación de mayo de 2006, como también (y aún más importante según el economista Mark Weisbrot) la mayor participación del Estado en la industria, generaron un aumento de casi siete veces

en el ingreso estatal derivado de ese sector (Weisbrot, 2015: 193; Otis, 2014; Macías Vázquez y García-Arias: 2021: 67; Paz y Ramírez-Cendrero, 2021: 138-139). En Venezuela, la Ley Orgánica de Hidrocarburos promulgada en noviembre de 2001 tuvo un impacto similar al casi doblar la regalía petrolera a 30 por ciento, por encima de lo del resto de la región. También estableció que el Estado tuviera más de 50 por ciento de las acciones de las empresas mixtas en el sector petrolero, un porcentaje que fue aumentado a 60 por ciento en 2007.

Por otra parte, contrario a los términos aplicados por los gobiernos de la Marea Rosa, los gobiernos conservadores establecieron requerimientos relativamente blandos a las empresas petroleras multinacionales. En el caso de Colombia, el gobierno fue incluso alabado por el *Wall Street Journal* por haber “manejado sus finanzas con prudencia” a diferencia de Venezuela, Brasil y Argentina (Luhnow, 2019: A-2). La comunidad corporativa internacional elogió al presidente colombiano Iván Duque por alentar la exploración costa afuera y ser receptivo al fracking (y así revertió su posición previa en contra de esa práctica) y prometer “rebajar las tasas impositivas corporativas, disminuir la burocracia, tomar medidas enérgicas contra la evasión de impuestos, y reducir las instancias de incertidumbre legal para los inversionistas interesados en entrar en el sector petrolero y minero”. En contraste, el rival electoral principal de Duque, el izquierdista moderado Gustavo Petro, prometió “un alejamiento rápido de la producción de hidrocarburos” a favor de “políticas sustentables y ambientalmente amigables” (Long, 2018: 6). Similarmente, el presidente conservador en Ecuador Lenín Moreno desmontó las reformas impositivas del gobierno de Correa, incluyendo el impuesto de 70 por ciento sobre las superganancias mineras, que él eliminó.

Una mirada al contexto histórico del nacionalismo de los recursos en América Latina arroja luz sobre la importancia de su resurgimiento en el siglo 21 después del periodo de la ascendencia neoliberal. El control estatal de sectores estratégicos de la economía fue originalmente una bandera de la izquierda que celebró la nacionalización de la industria petrolera en México en 1938 y del estaño en Bolivia en 1952, así como la creación del YPF en Argentina en 1922. Sin embargo, ya para los años 60, el apoyo a este tipo de medidas fue más allá de la izquierda, ya que los partidos centristas e inclusive el capital global y Washington dejaron de insistir que ellas eran expresiones del socialismo. Este consenso parcial, sin embargo, duró hasta la época neoliberal de los 80 y 90 y los años siguientes cuando la nacionalización de las industrias estratégicas y el intervencionismo económico en general generaron conflictos agudos que desestabilizaron los gobiernos en Venezuela, Bolivia y Argentina.

La nacionalización y la “renacionalización” de la industria petrolera en Venezuela pusieron en evidencia el cambio del ambiente político. Las empresas petroleras multinacionales y Washington no pusieron resistencia a la nacionalización de la industria petrolera en 1976 y de hecho colaboraron estrechamente con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) al facilitar su transición (Hellinger,

2006–2007: 57). Esta concordancia y colaboración contrastaron con la reacción de actores poderosos pro-sistema contra las políticas de Hugo Chávez, cuya Ley Orgánica de Hidrocarburos de noviembre de 2001 condujo al golpe de estado abortivo cinco meses después. En 2007, Exxon y ConocoPhillips se retiraron de Venezuela y llevaron sus casos a los tribunales internacionales en reacción a la decisión de Chávez de aumentar el control estatal de las empresas mixtas a 60 por ciento y transferir a sus empleados a la nómina de PDVSA. Al mismo tiempo, el presidente de Exxon-Mobile, Rex Tillerson, abogó por un embargo de los activos venezolanos en los EE.UU.

Los dos aspectos básicos del nacionalismo de los recursos –las expropiaciones de las industrias extractivistas y la maximización de los beneficios derivados de ellas– estuvieron al centro de los intensos conflictos entre los gobiernos no radicales, como el de Argentina y Brasil, y los intereses petroleros multinacionales y sus aliados. El control estatal de la industria petrolera fue una bandera histórica que dató de la creación de YPF en 1922 y Petrobras en 1953 bajo la consigna “El Petróleo Es Nuestro”. Los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva detuvieron la reducción del papel del Estado en la industria que caracterizaba los gobiernos neoliberales en los años 90.

Poderosos actores internacionales reaccionaron agresivamente contra la decisión de Fernández de tomar control mayoritario de YPF en 2012. La compañía española Repsol, antigua propietaria de YPF, llevó el caso a los tribunales internacionales y presionó al primer ministro de su país, Mariano Rajoy, para tomar represalias económicas y pedirle a la Unión Europea la imposición de sanciones a las exportaciones argentinas (Burgueño, 2015: 226). Al mismo tiempo, el *Wall Street Journal* (así como el *Washington Post*) pidió la expulsión de Argentina del G20, y salió diciendo en una editorial que “cuando la presidenta [de ese país] actúe como una jefa de Estado de verdad y no una matona, ese país pudiera ser invitado de nuevo para formar parte del club de los países serios” (*Wall Street Journal*, 2012: A-16). En cambio, los seguidores de Fernández vieron la toma de control de YPF como un día de júbilo para la patria mientras se plasmaba la celebración de “retomar lo que es nuestro” en carteles y grafitis (Schmall, 2012: 95).

En Brasil, los gobiernos neoliberales de los 90 nombraban a los ejecutivos de la compañías mineras y siderúrgicas para la junta directiva de Petrobras, vendieron 16 por ciento de sus acciones y abrieron la industria petrolera a la competencia de multinacionales, que por su parte objetaron la legislación ambiental de ese país. Lula (en su segunda presidencia) y su sucesora Dilma Rousseff frenaron esta “flexibilización” como parte de su estrategia neodesarrollista (Schutte, 2013: 58–61). La comunidad empresarial internacional los criticó alegando que los subsidios en los precios de la gasolina y otros derivados de petróleo eran expresiones de la politización de la industria y luego felicitaron a Michel Temer (quien sucedió a Rousseff después de su destitución) por haber modificado esas políticas (Moffett, 2007: A-1; Oddone, 2016: 2). La editora del *Wall Street Journal* Mary Anastasia O’Grady elogió al presidente Jair

Bolsonaro, cuya elección representaba en sus palabras “un despertar nacional que ha llevado al socialismo a los tribunales”. También dijo que “Bolsonaro ofrece mucho de lo que aquellos que quieren modernizar a Brasil solamente habían soñado con hacer durante el gobierno del Partido de los Trabajadores” (O’Grady, 2018: A-21). O’Grady aplaudió el compromiso del gobierno de Bolsonaro de vender los activos no-básicos de Petrobras y reducir su deuda, conjuntamente con la desregularización, algunas privatizaciones y la creación de un banco central independiente.

Diferentes posiciones sobre la integración latinoamericana y las inversiones chinas

Las iniciativas a favor de la integración latinoamericana también reflejan diferencias fundamentales entre los gobiernos de la Marea Rosada —que emplearon una retórica nacionalista y defendieron el nacionalismo de los recursos— y los conservadores. Al fondo de este deslinde estaba el rechazo por parte de la Marea Rosada al Panamericanismo, lo cual representó la continuación de un debate entre los latinoamericanos que lleva ya un siglo sobre si la unidad entre los países de la región debería abarcar todo el hemisferio o el continente. Chávez defendió el segundo planteamiento en la Cumbre de las Américas en Quebec City en 2001 cuando se opuso al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), por lo menos por ahora, basándose en que América Latina no estaba en posición de negociar con los EE.UU. como iguales. Chávez conjuntamente con Néstor Kirchner y Lula fueron decisivos en enterrar la propuesta del ALCA en 2005 y luego ayudaron a fundar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008 y la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas (CELAC) en 2010.

La fortaleza de la UNASUR y la CELAC, cuya consigna fue “la unidad en la diversidad”, fue que, a pesar de estar conformadas por gobiernos de orientaciones ideológicas diversas, los unía la defensa al nacionalismo latinoamericano y el rechazo al Panamericanismo. La fundación de la UNASUR representó una reacción en contra de la propuesta del ALCA y llegó a ser, en palabras de dos académicos, “un proyecto político diseñado para alejar a los EE.UU. de la región cuando se trataba de temas estratégicos”, mientras que la CELAC “posiblemente apuntaba al reemplazo de la OEA” (Quiliconi y Salgado Espinoza, 2017: 30–31, 36). Al mismo tiempo, los líderes de la Marea Rosada y arquitectos de ambas organizaciones promovieron los lazos con China con el fin de lograr la diversificación comercial y disminuir la dependencia de los EE.UU., avanzando así en la meta del mundo multipolar.

Una estrategia contrastante fue promovida por la Alianza Pacífica, formada por México, Colombia, Perú y Chile en 2011, conjuntamente con los EE.UU., con el propósito de promover acuerdos regionales en favor de la liberalización global. La alianza también fue creada con “objetivos políticos”, específicamente con el fin de “consolidar un grupo de países latinoamericanos” comprometidos con las políticas neoliberales (Quiliconi y Salgado Espinoza, 2017: 32). Las razones de la salida de

Venezuela de la Comunidad Andina (CAN) en 2006 arroja luz sobre el deslinde entre los países de la Alianza Pacífica y los de la Marea Rosada. Chávez criticó la interferencia norteamericana en las decisiones tomadas en el marco de la CAN, los acuerdos comerciales bilaterales entre Perú así como Colombia con los EEUU, el programa de erradicación de la droga promovido por los EEUU, y el componente militar del Plan Colombia.

Durante el periodo de la Marea Rosada, variaron los puntos de vista referentes a las iniciativas en favor de la integración latinoamericana. Aquellos que se identificaron con la izquierda tendían a tener opiniones favorables, en contraste con las actitudes de los líderes izquierdistas en los años anteriores (Deutschmann y Minkus, 2018: 42–43). Algunos analistas, incluyendo los del neo-extractivismo, mostraron escepticismo en cuanto a los beneficios derivados de estas iniciativas, mientras que otros analistas fueron relativamente optimistas. Svampa (2019: 18) escribe sobre “el fracaso del regionalismo latinoamericano” que parece estar asociado con “una nueva dialéctica de dependencia” y apunta hacia los pocos resultados concretos de los ambiciosos proyectos que fueron lanzados. Los gobiernos más activos en la creación de UNASUR, CELAC y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) “terminaron asumiendo un discurso beligerantemente desarrollista en defensa del extractivismo”, con resultados devastadores (Svampa y Viale, 2014: 360; Lander, 2014: 9–10; Lo Brutto, Vázquez Salazar, and Olavarria, 2015: 68). Finalmente, de acuerdo con Svampa los acuerdos comerciales bilaterales con China y la competencia para atraer inversiones chinas eran contrarios al espíritu de la integración latinoamericana, mientras que la voraz demanda china de materias primas intensificó el extractivismo con todas sus consecuencias no deseables.

Los “optimistas” escribieron favorablemente acerca de los pasos tomados por UNASUR y CELAC en favor de la “gobernanza regional”. Abarcando corrientes ideológicas diversas, plantearon que la lucha política y los asuntos políticos no pueden ser omitidos en la discusión sobre el tema (Quiliconi and Salgado Espinoza, 2017: 22). Ambas organizaciones perdieron relevancia como resultado de las derrotas políticas sufridas por la Marea Rosada después de 2015, mientras que el acuerdo petrolero de Petrocaribe –creado en el marco de la integración y que funcionó por más de una década a partir de su lanzamiento en 2005– fue víctima del colapso de la industria petrolera venezolana en parte como resultado de las sanciones internacionales.

La soberanía nacional y el nacionalismo económico en el contexto de la globalización también son elementos claves en el análisis de los lazos económicos con China (para una discusión balanceada sobre el papel económico de China en América Latina, ver To, 2021). Divisiones importantes surgieron a lo largo de líneas políticas. Los líderes de la Marea Rosada alabaron a los chinos por su respeto a la soberanía nacional en contraste con el Fondo Monetario Internacional, con sus términos “humillantes” y criterio rígido para la autorización de préstamos (Burgeño, 2015: 39; Harris, 2015: 154; Malm, 2019).

Los contratos chinos fueron criticados por carecer de criterios políticos en casos de flagrantes violaciones de los derechos humanos, como en el caso de Sudán en el momento de la tragedia de Darfur y otros estados condenados mundialmente. Beijing respondió al aseverar que la piedra angular de su política extranjera era el principio de la no intervención en asuntos internos formulado en la Conferencia de Bandung en 1955 (Allard, 2012: 280–281).

Los líderes de la Marea Rosada vieron la diversificación de relaciones comerciales (y las inversiones en la infraestructura que los chinos priorizaron) como especialmente ventajosa. Ellos notaron que, a pesar de la retórica oficial, las consideraciones ideológicas influían en las decisiones chinas sobre las inversiones, proporcionando una ventaja a los países de la Marea Rosada (Harris, 2015: 176). En contraste, durante las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, Bolsonaro empleó una retórica anti-china y alegó que esa nación era una depredadora que trataba de tomar control de los sectores claves de la economía. Además, el gobierno de la derecha que llegó al poder en Bolivia en 2019 canceló los planes vigentes para proyectos enmarcados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta china.

En pocas palabras, lejos de constituir un “consenso”, las vinculaciones económicas y los acuerdos institucionales a nivel internacional promovidos principalmente por los gobiernos de la Marea Rosada fueron altamente polémicos. De hecho, estos asuntos continuarán estando por muchos años en el centro de discusión y debate entre los formuladores de políticas y el público en general.

La territorialidad, la autonomía indígena y el ambiente

Varios asuntos complejos estuvieron detrás de las controversias sobre el extractivismo y la territorialidad en América Latina. Esta complejidad representaba un dilema para los líderes de la Marea Rosada debido al marcado contraste entre su retórica en favor de cambios trascendentales y las espinosas decisiones concretas que tenían que tomar. Un análisis objetivo tiene que distinguir entre las situaciones en las que una solución a término medio sobre el ambiente y los derechos de los indígenas eran factibles y las situaciones en las que principios inquebrantables estaban de por medio.

Tres Asuntos Problemáticos

¿Deben variar las políticas sobre el extractivismo de acuerdo con el contexto internacional? ¿Deben los países en vía de desarrollo recibir un trato especial y ser sujetos a diferentes estándares que los países desarrollados en lo que refiere al extractivismo?

Rafael Correa defendió la posición de diferenciar entre los países desarrollados y no desarrollados en controversias sobre el extractivismo cuando dijo: “No podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro”. La aseveración fue hecha para justificar los proyectos extractivistas que habían sido cuestionados por activistas indígenas y ambientalistas. En el mismo sentido, el sociólogo izquierdista Atilio Borón (2013: 11–12) afirmó que los escritores del neo-extractivismo no contemplan donde los países del Tercer Mundo van a obtener “los recursos esenciales para mejorar las condiciones de vida” para los más victimizados por el imperialismo, como lo es la población indígena.

Luego Borón asevera que la transformación contemplada por esos escritores, basada en un rompimiento total con el capitalismo global y el rechazo rotundo a los megaproyectos, no es factible para el Tercer Mundo. Si la Unión Soviética y China no pudieron consolidar el socialismo, no se puede esperar que las naciones más pequeñas como Bolivia y Ecuador vayan a lograr cambios, inclusive más radicales, “en un periodo corto y en un ambiente tan desfavorable como el impuesto por la decadencia agresiva del poder imperial” (Borón, 2012: 141). El ex-vicepresidente boliviano Alvaro García Linaera también defendió una perspectiva a largo plazo y así justificó los proyectos extractivistas ambiciosos, que fueron diseñados para aprovecharse de los recursos naturales, con el fin de conducir a un capitalismo estilo indígena (“el capitalismo Andino-Amazonio”) y eventualmente crear las condiciones para el socialismo. Borón (2013: 12) cuestiona particularmente las “versiones extremas de la crítica al extractivismo” que abogan por un crecimiento económico cero, una posición asociada al ex-ministro de energía y minas de Ecuador Alberto Acosta, quien arremete contra “la religión del crecimiento económico” (2017: 77, 97). Borón asevera que en el mundo del desarrollo –especialmente en los países con un aumento poblacional considerable– el crecimiento económico es imperativo, aun cuando la redistribución de la riqueza favorezca a los sectores populares. Al mismo tiempo, cuestiona la validez de la posición anti-extractivista de la “ecología profunda”, que presume que un país como Bolivia “puede alimentar su población... a través de las técnicas de cultivo de la población indígena” (Borón, 2012: 129).

Una de las luchas más controversiales e importantes en América Latina, la del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía de Ecuador, que contiene cerca de 40 por ciento de las reservas petroleras de ese país, inicialmente se centraba en el asunto de la “justicia ambiental” y las relaciones Norte-Sur. La propuesta de Rafael Correa, presentada a las Naciones Unidas en 2007, para la creación de un fondo internacional en

defensa del ecosistema frágil del Yasuní surgió del movimiento ambiental global y su bandera de la justicia ecológica. En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, el movimiento había insistido que los países desarrollados asumieran su responsabilidad por la “deuda ambiental” creada por el pillaje histórico de los recursos del Tercer Mundo y su consumo desproporcionado. La propuesta de Correa también reflejó la convicción de muchos activistas ambientales quienes consideraron que el Sur había llegado a ser “un protagonista y líder en la solución al problema del cambio climático” (Martínez Alier, 2007: 4227). El plan, que consistió en compensar al gobierno a cambio de su compromiso de no hacer perforaciones petroleras para el petróleo en la zona, fue formulado por una importante ONG basada en Ecuador y fue incorporado en la plataforma electoral de Correa. La propuesta creó mucha expectativa y resultó en los compromisos de varios países incluyendo a China y Alemania.

Correa fijó el precio de \$5 por cada barril de petróleo no producido en la forma de donaciones para programas que beneficiaron a la población indígena y el ambiente, pero insistió que el Estado ecuatoriano tuviera el derecho de veto para las asignaciones. Esta posición no fue sorprendente dada la importancia que los gobiernos de la Marea Rosada dieron a la defensa de la soberanía nacional, pero creó desconfianza entre los potenciales donantes. Hasta agosto de 2013, cuando Correa anunció que el dinero recibido a nivel internacional fue muy por debajo de lo esperado, el plan fue sujeto a un debate intenso dentro del gobierno (Martín, 2015: 131), el cual empezó a hacer planes alternativos. La explicación principal del fracaso del plan fue la falta de compromiso por parte de los gobiernos de los países desarrollados. Algunos de los analistas que acusan a Correa de ser un “populista de desarrollismo” minimizan la importancia de estos asuntos de debate y el contexto histórico y enfocan su análisis en las controversias y enfrentamientos una vez que la perforación ya había iniciado (Eisenstadt and West, 2017: 232).

¿Cuáles son los casos en los que proyectos extractivistas que han sido cuestionados por razones ambientales deben ser completamente descartados y cuáles son los casos de proyectos que pudieran ser rediseñados con el fin de minimizar el daño ecológico?

En el mundo desarrollado, los ambientalistas han presentado argumentos contundentes sobre la necesidad de desechar totalmente ciertos megaproyectos, como en el caso de los proyectos de oleoductos conocidos como el Dakota Access y el Keystone XL y han aseverado que el término “carbón limpio” es un oxímoron. Similarmente, los escritores del neo-extractivismo tratan de demostrar las “consecuencias totalmente negativas desde el punto de vista cultural y ambiental” de los megaproyectos latinoamericanos (Svampa, 2019: 32; Lander, 2019: 94–98). En contraste, los escritores más pro-Marea Rosada plantean que los gobiernos como el de Correa respondieron a las preocupaciones ecológicas al comprometerse con limitar el área sujeta a la perforación petrolera y aplicar controles ambientales estrictos (Anderson, 2015: 116–117). Svampa (2019: 42) observa que, en las regiones con una tradición minera, las comunidades están más dispuestas a aceptar los proyectos

extractivistas, pero insiste en modificaciones para mejorar “las condiciones laborales y ambientales”, mientras que en las áreas nuevas como aquellas sujetas a la minería a cielo abierto las comunidades asumen una posición más intransigente y “radical”.

En el caso de la disputa del TIPNIS, los grupos indígenas y ambientalistas alegaron que el proyecto fue inherentemente defectuoso y que no había ninguna solución sustentable factible. En contraste, García Linera llamó la vía una “carretera ecológica” y aseveró que, en cumplimiento con la legislación reciente, fue diseñada con la “participación indígena en concordancia con las normas ambientales” (Achtenberg, 2017).

¿La estipulación que señala que el Estado tiene que consultar a las comunidades indígenas sobre los proyectos extractivistas significa que *estas* tienen derecho de veto?

Las constituciones promulgadas por gobiernos de la Marea Rosada en Bolivia y Ecuador requieren que el Estado consulte a las comunidades indígenas acerca de los proyectos extractivistas, una obligación adquirida en otras partes de la región como resultado de la legislación nacional y acuerdos internacionales (Carrión, 2012: 9–15). La “Organización Internacional del Trabajo insiste que la consulta por parte del Estado sea de buena fe (Svampa, 2019: 30). Svampa (2019: 32) examina las experiencias en la región y concluye que “no hubo ningún gobierno latinoamericano que no tratara de minimizar” el derecho a la consulta previa e informada y de “limitar la ley a su versión más débil” con el fin de “establecer su carácter no vinculante”. Algunos de los conflictos analizados por los escritores del neo-extractivismo y otros críticos de la Marea Rosada están relacionados al desconocimiento estatal del derecho de consulta (Svampa, 2019: 31; Postero, 2017: 142; Achtenberg, 2013: 6), pero la mayoría de los casos tuvieron que ver con la acusación de que el gobierno no actuaba de buena fe. Svampa señala que el asunto del derecho de consulta se ha presentado en “disputas sociales y legales cada vez más complejas” y luego acusa a Morales y a Correa de ser “manipulativos” en la implementación de esas normas (Svampa, 2019: 31–33).

Las distintas posiciones sobre el extractivismo y la territorialidad

Como he afirmado en este ensayo, el sector extractivista en el siglo veintiuno ha generado importantes diferencias entre los gobiernos latinoamericanos. Aunque Svampa, Gudynas y otros escritores del neo-extractivismo reconocen algunas de estas diferencias, estas deben ser incorporadas en el modelo neo-extractivista para evitar la impresión de homogeneidad. La legislación laboral, por ejemplo, incidió en la industria extractivista grandemente y distinguió a los gobiernos neoliberales y los de la Marea Rosada. Mauricio Macri, elegido presidente de Argentina en 2015, deshizo las reformas y legislación implementada por los últimos dos presidentes que

eran de corte nacionalista (Svampa, 2019: 24). En Venezuela, la “Apertura Petrolera” de los años 90 inspirada por el neoliberalismo despojó a los trabajadores petroleros de los beneficios históricos, como los contratos colectivos únicos por industria, los cuales Chávez restauró con lo que él llamó la “nacionalización” de la industria en 2007, y luego la nueva ley del trabajo en 2012. (2)

Similarmente, es necesario hacer distinciones referentes a los asuntos ambientales, a pesar de que los gobiernos de la Marea Rosada realizaron proyectos con un impacto ambiental destructivo. Svampa (2014: 325–351) documenta el daño ambiental a costa de las comunidades Mapuche como resultado del fracking en la región de la Patagonia bajo el gobierno de Cristina Fernández. En contraste, otro académico presenta un análisis balanceado, si no favorable, a las sensibilidades y acciones ambientales de Fernández y su esposo Néstor Kirchner, en comparación con su predecesor Carlos Menem. Tanto como políticos en su estado de Santa Cruz, así como durante su mandato presidencial, los Kirchners promovieron proyectos verdes y educación en la localidad estratégica de El Chaltén y movimientos populares en favor del desarrollo sustentable en la Patagonia que han “constituido la base de la resistencia a los intereses mineros transnacionales y proyectos hidroeléctricos corporativistas” (Mendoza, 2018: 182). Similarmente, algunos escritores ven a los gobiernos de la Marea Rosada de Bolivia, Brasil y El Salvador como más progresistas que los neoliberales desde el punto de vista ambiental (Fabricant y Gustafson, 2017; Amigo, 2020; Bebbington, Fash y Rogan, 2021: 222).

El surgimiento de la derecha en varias naciones latinoamericanas en los años recientes pone a la vista las distinciones entre los gobiernos sobre los asuntos relacionados al ambiente, la territorialidad y los derechos de los indígenas. Este contraste es especialmente evidente en el caso de Brasil con la elección de Bolsonaro en 2018 y la renuncia forzada de Evo Morales en 2019. Una comparación de las reacciones de Bolsonaro y Morales a los incendios que destruyeron áreas extendidas del bosque lluvioso de la Amazonia al final de 2019 es instructiva. Los críticos a Morales lo culparon por la deforestación que aumentó la tierra disponible para la ganadería y las pequeñas granjas. Aparte de esa controversia, las respuestas a los incendios por parte de los dos jefes del Estado demuestran visiones y sensibilidades hacia los desafíos ecológicos radicalmente diferente. Frente a los incendios, Bolsonaro y miembros destacados de su gabinete inmediatamente rechazaron ayuda del extranjero y articularon un discurso desarrollista en el cual los países europeos fueron acusados de usar el incendio para frenar los esfuerzos del gobierno de “reconstruir Brasil”. Al mismo tiempo, Bolsonaro caracterizó los planes de protección del bosque como un obstáculo al desarrollo económico. También culpó a las ONGs locales y al World Wildlife Fund (que él equivocadamente alegó fue financiado por Leonardo DiCaprio) de haber propiciado los incendios con el fin de solicitar donaciones. En contraste, Morales agradeció el apoyo del extranjero para combatir los incendios y tomó medidas proactivas que fueron reconocidas por la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa.

Similarmente, el contraste entre Morales y el gobierno provisional de Jeanine Áñez que lo reemplazó en 2019 arroja luz sobre la diferencia entre gobiernos en materia de derechos de la población indígena. Las masivas movilizaciones en contra del gobierno de Áñez en medio de una fuerte represión demostraron el apoyo activo y organizado a favor de Morales por parte de la población indígena y los sectores populares en general, incluyendo aquellos afectados por los proyectos extractivistas. El extractivismo en el mundo entero usualmente tiene ganadores y perdedores y genera reacciones mixtas. En Bolivia, el apoyo a los proyectos extractivistas fue más allá de la aprobación pasiva en forma de sondeos de opinión pública o votos en elecciones. Los coccaleros, quienes apoyaron fervientemente la construcción de la carretera de TIPNIS, pusieron la mayor resistencia al gobierno de Áñez, tomando control de la región de Chapare donde se concentraron y obligaron a la policía a huir de la zona.

La única manera de interpretar la oposición popular al golpe contra Morales es tomar en cuenta que la reacción entre los sectores no privilegiados a los proyectos ambiciosos de desarrollo fue mixta. El conflicto de TIPNIS no solamente colocó a los coccaleros contra la población indígena de las tierras bajas; otros grupos sociales y étnicos también participaron a favor y en contra. Los proyectos extractivistas del gobierno ganaron el apoyo de una gran parte de la población campesina, un hecho reconocido por activistas indígenas anti-gobierno. Nancy Postero (2017: 143) cita a uno de ellos: “Muchos ven a Evo como traidor. No lo veo así. Yo lo veo como lo que es, un dirigente del sindicato campesino. ¿De dónde salió la idea de que los campesinos son revolucionarios?” Postero entonces señala “la diversidad de los intereses y estrategias entre el pueblo local” en el área de TIPNIS donde la población indígena se dividió sobre el asunto. La confederación pro-Morales de los Guaraní de la tierra baja recibió fondos generosos para administrar “los proyectos de producción en las comunidades indígenas que simpatizaron con el gobierno”, una práctica que condujo a “nuevos tipos de clientelismo” (2017: 146, 149).

Además de los indígenas de la tierra baja, los miembros de las cooperativas mineras pusieron resistencia a los esfuerzos del gobierno de Morales de fortalecer la regulación estatal. En otros países, los proyectos extractivistas también han creado conflictos entre los grupos no privilegiados organizados. Luis Angosto-Ferrández describe esta complejidad en el caso de Venezuela, con ganadores y perdedores dentro y fuera de las comunidades indígenas en el sur del Río Orinoco conocido como el Arco Minero del Orinoco (Angosto-Ferrández, 2020: 256–260).

Los recientes eventos en Bolivia también demuestran la necesidad de contextualizar el asunto de la territorialidad y la complejidad de las demandas de autonomía regional en las naciones del Tercer Mundo, donde la unidad nacional y el fortalecimiento del Estado son metas de larga data. La propuesta de la construcción de la carretera de TIPNIS, por ejemplo, tenía como fin integrar las regiones de la Amazonía y los Andes, una meta que una escritora crítica a Morales desde la izquierda describió como “un sueño desde la independencia de Bolivia” (Achtenberg, 2017). La carretera

fue diseñada para reducir los costos de transporte comercial –los cuales estaban 20 por ciento por encima que en los países vecinos– como resultado de la condición de Bolivia de ser un país sin acceso al mar. Sin embargo, las aspiraciones del gobierno de Morales chocaron con el concepto del estado plurinacional, que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), había incorporado en la Constitución de 2009. El asunto de la territorialidad también condujo a los enfrentamientos agudos entre el gobierno y los cooperativistas mineros (Fabricant and Gustafson, 2017).

Al tiempo de la redacción de la nueva constitución, la bandera de la autonomía regional fue levantada por los grupos de la elite política y económica reaccionaria del departamento de Santa Cruz. El control de los ricos recursos naturales, particularmente los hidrocarburos y la producción de soya, condujo a las controversias sobre la territorialidad en Santa Fe, como fue el caso de las luchas indígenas en TIPNIS y Yasuní. La élite de Santa Cruz y los sectores privilegiados de Potosí, que exigían el control sobre la explotación del litio (3), desempeñaron un papel clave en la resistencia al gobierno de Morales y su derrocamiento en 2019. Una vez que lograron su objetivo, esas mismas élites formularon una narrativa abiertamente anti-indígena. El gobierno de Ñez se rehusó a reconocer la autonomía indígena incluyendo sus prácticas religiosas. Al mismo tiempo, sus seguidores satanizaron los símbolos de los indígenas como su bandera (la *wiphala*) en nombre del nacionalismo boliviano. En breve, la autonomía regional se expresó en Bolivia en formas contradictorias y así demostró que el asunto de la territorialidad en los conflictos sobre el extractivismo tenía implicaciones diferentes, dependiendo del lugar y el tiempo.

La resistencia

Desde el regreso a los gobiernos democráticos en los años 80, las luchas rurales alrededor del extractivismo y la territorialidad y los movimientos socio-ambientales en las áreas urbanas han tenido una importancia sobresaliente, aún más que los conflictos laborales en algunos países latinoamericanos. Las organizaciones rurales incluyendo a las indígenas que han dirigido esas luchas han llegado a ser actores importantes en la política de sus respectivos países. Las mujeres han estado en la vanguardia en muchos de esos movimientos. Amalia Leguizamón demuestra que el asunto del género es fundamental para entender el extractivismo del siglo veintiuno. En primer lugar, exagera la desigualdad de género, ya que el empleo está sesgado en favor de los hombres. En segundo lugar, los hombres están al frente de la economía extractivista, y controlan los recursos naturales y las innovaciones tecnológicas. Finalmente, la mujer desempeña un papel central en las protestas contra los abusos al mismo tiempo que “las élites políticas y económicas responden con insultos y típicas prácticas para silenciarlas y disciplinarlas” (Leguizamón, 2021: 204; ver también Fabricant y Gustafson (2014–2015: 42). Leguizamón (2021: 190) también asevera que la opresión de los grupos más victimizados por el extractivismo es estructural y

que “el género cruza con otras estructuras de desigualdad, como la raza, la clase y la etnicidad y así crea áreas múltiples de dominación”.

La represión estatal bajo los gobiernos de la Marea Rosada en Bolivia y Ecuador fue acompañada por una narrativa en que los movimientos de protesta fueron acusados de avanzar los intereses de la oligarquía y los políticos reaccionarios, de llevar a cabo el sabotaje y terrorismo, y de ser “conservadores, anti-modernos y en última instancia en contra del socialismo del siglo veintiuno” (Moore and Velásquez, 2013: 141; Becker, 2014: 142). Sin embargo, como Svampa (2019: 39–40) indica, la represión se ha intensificado bajo los gobiernos conservadores que han llegado al poder en el pasado reciente. “La llegada al poder de conservadores” en Brasil y Argentina (bajo Macri) “profundizó el modelo extractivista en todas sus versiones, acentuando la violencia estatal contra las poblaciones más vulnerables”. Svampa nota que América Latina “tiene el récord mundial en número de asesinatos a activistas ambientales”.

Anthony Bebbington, Benjamin Fash y John Rogan (2021: 222, 228) demuestran lo mismo en un trabajo que contrasta los gobiernos del Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional en El Salvador con los gobiernos de Honduras que sucedieron a la presidencia de Manuel Zelaya en 2009. Ellos señalan que los activistas ambientales en los años recientes han sido sujetos a mayor peligro que inclusive antes de la presidencia de Zelaya. De hecho, Honduras es uno de los cinco países más peligrosos en el mundo para defensores del medio ambiente.

Los dos asesinatos de activistas de movimientos sociales de los años recientes de mayor alto perfil –Berta Cáceres de Honduras y de Marielle Franco de Brasil– reflejan estas recientes tendencias. Cáceres era una activista ambiental e indígena destacada quien indudablemente fue asesinada por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica. Franco, por su parte, era una activista defensora de los derechos humanos y de los LGBT, quien denunció la violencia policial poco antes de ser asesinada. Los dos casos son significativos por lo que demuestran acerca de la resistencia y la represión en América Latina. En primer lugar, el género y la etnicidad son centrales en las luchas sociales del siglo veintiuno y específicamente en la oposición al extractivismo. Ambas víctimas eran mujeres, una era líder indígena y la otra un líder del movimiento LGBT. En segundo lugar, los asesinatos ocurrieron bajo gobiernos de derecha que habían llegado al poder a través de un golpe (un golpe “blando” en el caso de Brasil) contra gobiernos de la Marea Rosada (los de Zelaya y Rousseff). En tercer lugar, el Estado estaba implicado en los asesinatos y los encubrimientos. Varios de los detenidos por el asesinato de Cáceres fueron vinculados con las tropas de élite entrenadas por los EE.UU., mientras que dos de los detenidos por la muerte de Franco habían sido miembros de la policía militar, y otros dos eran cercanos a Bolsonaro y especialmente a su hijo Flávio. Los grupos de los derechos humanos denunciaron a los gobiernos de ambos países por no haber acometido una investigación imparcial por esos crímenes.

En pocas palabras, por más malo que haya sido el desempeño de los gobiernos izquierdistas, moderados y centristas sobre los asuntos relacionados con el extractivismo en diferentes circunstancias, las políticas de los gobiernos conservadores y de la derecha eran más reprobables. Leguizamón señala esta disimilitud en el caso de Macri, quien favoreció los intereses del sector exportador extractivista de la soya, en contraste con las políticas anteriores de los Kirchner y de las posteriores de Alberto Fernández. Kyla Sankey reconoce la deficiente gobernanza del Presidente Juan Manuel Santos sobre asuntos relacionados con el extractivismo, pero lo compara favorablemente con los presidentes de la derecha Uribe y Duque. Ella escribe: “Mientras que la piedra angular de la estrategia minera de Uribe era la militarización de los territorios ricos en materias primas, el discurso de Santos se centraba en el fortalecimiento de las instituciones y la estabilidad... Mientras que Uribe cerró el Ministerio del Ambiente, Santos lo reabrió” (Sankey, 2021: 47).

Conclusión

Los gobiernos latinoamericanos del siglo veintiuno de todas las tendencias ideológicas son responsables por la destrucción ambiental y la violación de los derechos indígenas, y además ninguno de ellos priorizó la diversificación económica con el fin de superar la dependencia sobre la exportación de los commodities. Sin embargo, en este artículo he criticado la tesis del neo-extractivismo que subestima la importancia de las diferencias entre los gobiernos de la Marea Rosada, los del centro y los de la derecha. Indudablemente, esta crítica no se aplica a todos los escritores que examinan críticamente las políticas ambientales e indígenas de los gobiernos progresistas y sus estrategias económicas que mantuvieron la dependencia del capitalismo global.

Los escritores del neo-extractivismo, al centrar su análisis en el “consenso” entre diversos gobiernos latinoamericanos en cuanto a la necesidad de explotar la potencial extractivista de su país, no dan suficiente peso a las políticas que claramente diferencian los presidentes de la Marea Rosada y los no-progresistas. Esta tendencia ha influenciado a algunos activistas y escritores de tendencia izquierdista a condenar a los gobiernos progresistas y conservadores casi en términos iguales (una especie de “plaga en ambas casas” [Ellner, 2020: 53]). Los defensores de esta posición ubicados al lado izquierdo del espectro político apuntan a la poca voluntad de los gobiernos de la Marea Rosada de romper con el modelo extractivista.

Los recientes brotes de inestabilidad y los cambios del gobierno en Brasil, Bolivia, Ecuador y otros países apuntan a las implicaciones desfavorables de estas posiciones. En estos países, líderes políticos identificados con el neoliberalismo, gozando del apoyo de Washington, han usado medios ilícitos, así como la represión, con el fin de deshacer las reformas iniciadas por gobiernos de la Marea Rosada. La reacción de los críticos de la Marea Rosada ubicados a la izquierda del espectro ideológico variaba. En Bolivia, algunos de los críticos intelectuales y activistas más

firmes condenaron en términos absolutos el “golpe blando” ejecutado en 2019 (Achtenberg, 2020; Fabricant, 2019), pero otros permanecieron “extrañamente silenciosos” (Achtenberg, 2020) y aún otros, como el ex-embajador boliviano a las Naciones Unidas y activista indígena, Pablo Salón, negaron que lo que ocurrió en el país se pudiera llamar “golpe”. Salón, quien rompió con Morales como resultado del conflicto del TIPNIS, subestimó el empeño de la élite económica y la derecha política de usar tácticas disruptivas del pasado, como también la profundidad de la división ideológica en la nación. Salón equivocadamente creyó que la organización empresarial principal de Santa Cruz y en otras partes iban a mantener su neutralidad en las elecciones presidenciales de 2019. Al mismo tiempo, aseveró que “la dicotomía entre la izquierda y la derecha no es importante” ya que todos los partidos apoyaron el mismo “modelo económico extractivista de exportación” (Salón, 2019). Su punto de vista, que se asemejaba a los planteamientos de los escritores del neo-extractivismo, representaba la posición de “una plaga en ambas casas” en cuanto a Morales y la oposición boliviana de la derecha.

En Ecuador, el grupo indígena Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que dirigió la resistencia al proyecto de Yasuní, adoptó una posición similar sobre el gobierno neoliberal de Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa. Los ataques en contra de Correa, por parte del presidente de CONAIE Jaime Vargas frenaron la formación de un frente unido contra las políticas neoliberales del gobierno de Moreno en 2019. En el proceso, Vargas se prestó a la estrategia divisoria de Moreno, quien alegó que los seguidores de Correa, y no CONAIE, eran responsables por la violencia que se desató durante las protestas populares anti-neoliberales en 2019.

En Venezuela, algunos de los opositores al proyecto de la explotación de recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco, por considerarlo inherentemente destructivo desde el punto de vista ambiental, defendieron la misma posición de “una plaga en ambas casas”. El dirigente sindical veterano Stalin Pérez Borges, quien era un crítico del gobierno de Maduro y del Arco Minero del Orinoco, criticó a ciertas organizaciones políticas e individuos por su posición equidistante entre la derecha doméstica y Washington, por un lado, y la dirigencia chavista, por el otro. Estos opositores al gobierno, quien de acuerdo con Pérez incluía varios exministros del presidente Chávez de cierto prestigio, llamaron al gobierno “una dictadura criminal”. Pérez Borges (2016; 2019) aseveró que esta posición “coincide con la campaña de la prensa mundial burguesa”, cuya narrativa “sirve para justificar una intervención militar inmediata” y la imposición de las sanciones contra Venezuela.

Una parte de las observaciones de los escritores del neo-extractivismo es bien comprobada. Indudablemente, los proyectos extractivistas ambientalmente destructivos y la violencia contra aquellos que los han protestado han sido llevados a cabo bajo los gobiernos de la Marea Rosada. Sin embargo, factores más amplios tienen que ser incorporados en el análisis y no solamente reconocidos de forma pasajera. Este contexto incluye una diversidad de las políticas asociadas con

el extractivismo, la condición histórica de América Latina de subdesarrollo y la agresividad de la oposición doméstica y extranjera hacia los gobiernos progresistas.

Para resumir, los asuntos planteados por los escritores del neo-extractivismo son complejos. Dado que los temas, como el ambiente y los derechos indígenas, son emotivos y están relacionados con asuntos de principios, las diferencias entre los analistas de orientaciones ideológicas similares son naturales y entendibles. No obstante estas diferencias, un análisis amplio del extractivismo que dé peso adecuado a los factores contextuales es indispensable para lograr una evaluación balanceada y objetiva del desempeño de los gobiernos latinoamericanos del siglo veintiuno.

Notas

1. Este artículo es una versión modificada del trabajo “Introduction: Rethinking Latin American Extractivism” publicado en *Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism and Resistance in Broad Perspective*. Michelle Ellner, Carmen Sánchez de Ellner y Cuitlahuac Vázquez Sarao ayudaron con la traducción al español.

2. Bajo la reorganización de la industria petrolera por el gobierno de Chávez, los trabajadores que no estaban amparados por un contrato a nivel de la industria fueron incorporados en la nómina de PDVSA.

3. Gustafson (2019) señala que el presidente “neo-fascista” del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se unió con el líder máximo del Comité Cívico de Potosí —que se opuso al plan de Morales de crear una compañía estatal de litio— en la toma del Palacio Nacional en el momento del golpe de noviembre de 2019.

References

- Achtenberg, E. (2013). “Contested development: the geopolitics of Bolivia’s TIPNIS conflict”. *NACLA: Report on the Americas* 46 (2): 6–11.
- _____. (2017). “Why is Evo Morales reviving Bolivia’s controversial TIPNIS road?” *NACLA: Report on the Americas*. 21 de agosto. <https://nacla.org/blog/2017/08/22/why-evo-morales-reviving-bolivia-s-controversial-tipnis-road>.
- _____. (2020). “MAS party under threat as Bolivia moves towards new elections (without Evo)”. *NACLA: Report on the Americas*. 10 de enero. <https://nacla.org/blog/2020/01/10/mas-party-under-threat-bolivia-new-elections-without-evo>.
- Acosta, A. (2020). “Los progresismos demuestran en la práctica que no son gobiernos de izquierda” (entrevistado por Ángeles Fernández y J. Marcos). *CTXT* (Madrid) 257 (February). <https://www.ctxt.es/es/20200203/Politica/30926/alberto-acosta-politico-ecuador-exministro-evo-morales-entrevista-izquierda-latinoamerica.htm>.
- _____. (2017). “Post-extractivism: from discourse to practice—reflections for action”, pp. 77–101 en Gilles Carbonnier, Humberto Campodónico y Sergio Tezanos Vázquez (eds.), *Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America*. Leiden: Brill.
- Allard, G. (2012) “Chinese OFDI in Africa: trends, prospects and threats”, pp. 279–299 en Ilan Alon, Marc Fetscherin and Philippe Gugler (eds.), *Chinese International Investments*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Amigo, I. (2020). “When will the Amazon hit a tipping point?” *Nature*, 25 de febrero. <https://www.nature.com/articles/d41586-020-00508-4>.
- Anderson, J. L. (2017). “Nicolás Maduro’s accelerating revolution”. *The New Yorker* 93 (40). <https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/11/nicolas-maduros-accelerating-revolution>.
- Anderson, T. (2015). “From Havana to Quito: understanding economic reform in Cuba and Ecuador”. *Journal of Australian Political Economy* 76: 103–128.
- Angosto-Ferrández, L. (2021). “Neo-extractivism, class formations, and the Pink Tide: considerations of the Venezuelan case”, pp. 243–269 en Steve Ellner (ed.), *Latin America’s Pink Tide: Breakthroughs and Shortcomings*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Bebbington, A., Fash B. y Rogan J. (2021). “Mining governance in El Salvador and Honduras: Lessons from contrasting approaches to extractivism”, pp. 215–237 en Steve Ellner (ed.), *Latin America’s Pink Tide: Breakthroughs and Shortcomings*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

- Becker, M. (2014). "Rafael Correa and social movements in Ecuador", pp. 127–148 en Steve Ellner (ed.), *Latin America's Radical Left: Challenges and Complexities of Political Power in the Twenty-first Century*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Borón, A. (2012). *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
- _____ (2013). "Prólogo", pp. 9–14 en José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati (eds.), *Extractivismo, despojo y crisis climática: Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América*. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.
- Burgueño, C. (2015). *Las batallas económicas del Kirchnerismo*. Buenos Aires: Edhasa.
- Cannon, B. (2009). *Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution: Populism and Democracy in a Globalised Age*. Manchester: Manchester University Press.
- Carrión, Patricia (2012). *Análisis de la consulta previa, libre e informada en el Ecuador*. Quito: Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental.
- Deutschmann, E. y Minkus L. (2018). "Swinging leftward: public opinion on economic and political integration in Latin America, 1997–2010". *Latin American Research Review* 53 (1): 38–56.
- Eisenstadt, T. A. y Jones West K. (2017). "Public opinion, vulnerability, and living with extraction on Ecuador's oil frontier: where the debate between development and environmentalism gets personal". *Comparative Politics* 49 (2): 231–251.
- Ellner, S. (2019). "Explanations for the current crisis in Venezuela: a clash of paradigms and narratives". *Global Labour Journal* 10 (2): 159–169.
- _____ (2020). "Has the Pink Tide cycle come to an end?" pp. 39–58 en Steve Ellner (ed.), *Latin America's Pink Tide: Breakthroughs and Shortcomings*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Fabricant, N. (2019). "The roots of the right-wing coup in Bolivia". *Dissent*. 23 de diciembre. https://www.dissentmagazine.org/online_articles/roots-coup-bolivia-morales-anez-camacho.
- Fabricant, N. y Gustafson, B. (2014–2015). "Moving beyond the extractivism debate: imagining new social economies". *NACLA: Report on the Americas* 47 (4): 40–45.
- _____ (2017). "Socialism from below: Bolivia in an age of extractivism". *New Politics* 56 (3). https://newpol.org/issue_post/socialism-below-bolivia-age-extractivism/.
- Farthing, L. and Fabricant, N. (2018). "Introduction: charting the social, economic, and political contours of the new extractivism in Latin America". *Latin American Perspectives* 45 (5): 4–17.

- García Linera, A. (2016). “Discurso completo de Alvaro García Linera”. 29 de mayo. <http://www.cta.org.ar/discurso-completo-de-alvaro-garcia.html>.
- Gudynas, E. (2012). “Una izquierda marrón en América del Sur”. *Ecología Política* 43 (julio): 9–12.
- _____ (2016). “Beyond varieties of development: disputes and alternatives”. *Third World Quarterly* 37: 721–732.
- _____ (2018). *Naturaleza, extractivismos y corrupción: Anatomía de una íntima relación*. Montevideo: CLAES/La Libre.
- Gustafson, B. (2019). “Brazil and Bolivia at the crossroads” (entrevistado por Jeremy Scahill). *The Intercept*, November 13. <https://theintercept.com/2019/11/13/bolivia-and-brazil-at-the-crossroads/>.
- Harris, R. (2015). “China and Latin America: processes and paradoxes”. *Latin American Perspectives* 42 (6): 153–190.
- Hellinger, D. (2006–2007). “Venezuelan oil: free gift of nature or wealth of a nation?” *International Journal* 62 (1): 55–67.
- Krommes-Ravnsmet, J. (2019). “The frustrated nationalization of hydrocarbons and the plunder of Bolivia”. *Latin American Perspectives* 46 (2): 65–83.
- Lander, E. (2014). *El neoextractivismo como modelo de desarrollo en América Latina y sus contradicciones*. Berlin: Heinrich Böll Stiftung.
- _____ (2019). *Crisis civilizatoria: Experiencias de los gobiernos progresistas y debates en la izquierda latinoamericana*. Guadalajara: CALAS.
- Leguizamón, A. (2021). “The gendered dimensions of soybean extractivism in Argentina, pp. 189–209 en Steve Ellner (ed.), *Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism and Resistance in Broad Perspective*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Lo Brutto, G., Vázquez Salazar, C. y Olavarria, M. (2015). “The strategic integration of Latin America: a disputed project”. *Latin American Perspectives* 42 (4): 61–72.
- Long, G. (2018). “Colombia’s young president faces old challenges”. *Financial Times*, 19 de junio, p. 6.
- López, E. and Vértiz, F. (2015) “Extractivism, transnational capital, and subaltern struggles in Latin America”. *Latin American Perspectives* 42 (5): 152–168.
- Luhnow, D. (2019). “The outlook: Latin America’s prospects dim, again”. *Wall Street Journal*, 26 de Agosto, p. A-2.

- Macías Vásquez, A. y García Araís, J. (2021). “Financialization, Institutional Reform, and Structural Change in the Bolivian Boom (2006–2019)”, pp. 55–77 en Steve Ellner (ed.), *Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism and Resistance in Broad Perspective*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Malm, J. (2019). “China’s new debt sustainability framework for the BRI”. *The China-Africa Research Initiative Blog*, 27 de agosto. <http://www.chinaafricaarealistory.com/>.
- Martin, P. (2015). “Leaving oil under the Amazon: The Yasuní–ITT Initiative as a postpetroleum model?” pp. 119–144 en Thomas Princen, Jack P. Manno, y Pamela L. Martin (eds.), *Ending the Fossil Fuel Era*. Cambridge: MIT Press.
- Martínez Alier, J. (2007). “Keep oil in the ground: Yasuní in Ecuador”. *Economic and Political Weekly* 42 (42): 4227–4228.
- Mendoza, M. (2018). *The Patagonian Sublime: The Green Economy and Post-Neoliberal Politics*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Moffett, M. (2007). “Beyond ‘Petrosaurus’: how a sleeping oil giant became a world power”. *Wall Street Journal*, 30 de Agosto p. A-1.
- Moore, J. and Velásquez, T. (2013). “Water for gold: confronting state and corporate mining discourses in Azuay, Ecuador,” pp. 119–148 en Anthony Bebbington y Jeffrey Bury (eds.), *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*. Austin: University of Texas Press
- Oddone, D. (2016). “The oil and gas sector: a first glance at its changes”. Atlantic Council. <https://publications.atlanticcouncil.org/brazil-oil-gas/>.
- O’Grady, M. A. (2018). “Bolsonaro takes Brazil”. *Wall Street Journal*, 29 de octubre, p. A-21.
- Otis, J. (2014). “Socialist leader gets lift in Bolivian boom”. *Wall Street Journal*, 10 de octubre, p. A-9.
- Paz, M. J. y Ramírez-Centrero, J. (2021). “Extractivism and Resource Nationalism in Bolivia: Foreign Direct Investment Policy and Development under Evo Morales”, pp. 129–147 en Steve Ellner (ed.), *Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism and Resistance in Broad Perspective*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Pérez Borges, S. (2016). “Entrevista a Stalin Pérez Borges, dirigente de LUCHAS (Venezuela)”. *Democracia Socialista*, 3 de octubre. <http://www.democraciasocialista.org/?p=6278>.
- _____ 2019 “Entrevista a Stalin Pérez Borges: ‘Costará mucho doblegarnos’”. *Aporrea*, 2 de agosto. <https://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n338171.html>.

- Petras, J. and Veltmeyer, H. (2014). "A new model or a new form of imperialism?" pp. 19–48 en James Petras and Henry Veltmeyer (eds.), *Extractive Imperialism in the Americas: Capitalism's New Frontier*. Chicago: Haymarket Books.
- Postero, N. (2017). *The Indigenous State: Race, Politics, and Performance in Plurinational Bolivia*. Oakland: University of California Press.
- Quiliconi, C. y Salgado Espinoza, R. (2017). "Latin American integration: regionalism à la carte in a multipolar world?" *Colombia International* 92: 15–41.
- Salón, P. (2019). "Bolivian horizons: an interview with Pablo Salón" (interview by Jeffery R. Webber). *Solidarity*, 5 de noviembre. <https://solidarity-us.org/bolivian-horizons-an-interview-with-pablo-solon/>.
- Sankey, K. (2021). "The Political Economy of Mining in Colombia: The New Face of Globalization?" p. 33–54 en Steve Ellner (ed.), *Latin American Extractivism: Dependency, Resource Nationalism and Resistance in Broad Perspective*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Schmall, E. (2012). "Argentina: back to Peronism". *World Policy Journal* 29 (3): 90–99.
- Schutte, G. (2013). "Brazil: new developmentalism and the management of offshore oil wealth". *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 95 (October): 49–70.
- Svampa, M. (2012). "Resource extractivism and alternatives: Latin American perspectives on development". *Journal für Entwicklungspolitik* 28: 43–73.
- 2015 "Commodities consensus: neoextractivism and enclosure of the commons in Latin America". *South Atlantic Quarterly* 114 (1): 65–82.
- _____ (2019) *Neo-extractivism in Latin America: Socio-environmental Conflicts, the Territorial Turn, and New Political Narratives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Svampa, M. y Viale, E. (2014). *Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz Editores.
- To, Emma Miriam Yin-Hang (2021). "South-South cooperation or dependency with 'Chinese characteristics' en Venezuela?" pp. 77–100 en Steve Ellner (ed.), *Latin America's Pink Tide: Breakthroughs and Shortcomings*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Toledo, V., Garrido, D. y Barrera-Bassols, N. (2015). "The struggle for life: socio-environmental conflicts in Mexico". *Latin American Perspectives* 42 (5): 133–147.
- Wall Street Journal* (2012). Editorial, 18 de abril p. A-16.

Webber, J. R. (2015a). "Crisis and class, advance and retreat: the political economy of the new Latin American left", pp. 157–168 en Lucia Pradella y Thomas Marois (eds.), *Polarizing Development: Alternatives to Neoliberalism and the Crisis*. London: Pluto Press.

_____(2015b). "The indigenous community as 'living organism': José Carlos Mariátegui, romantic Marxism, and extractive capitalism in the Andes". *Theory and Society* 44: 575–598.

_____(2017). *The Last Day of Oppression, and the First Day of the Same: The Politics and Economics of the New Latin American Left*. Chicago: Haymarket Books.

Weisbrot, M. (2015). *Failed: What the "Experts" Got Wrong about the Global Economy*. New York: Oxford University Press.

Weyer, E. (2017). "Implementing 'vivir bien': results and lessons from the biocultural programme, Bolivia", pp. 128–137 en Gilles Carbonnier, Humberto Campodónico, y Sergio Tezanos Vázquez (eds.), *Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America*. Leiden: Brill.

Zibechi, R. (2019). "Las vueltas del neoliberalismo". *La Jornada*, 27 de septiembre. <https://www.jornada.com.mx/2019/09/27/opinion/020a1pol>.

Enviado: 07 de junio de 2021

Aceptado: 27 de octubre de 2021